

Imprimir

En estos días el tema agrario volvió a ser el tema campesino. Antes se hablaba casi exclusivamente de productos y en cambio ahora habla más de los productores. Ya no se tiene una preocupación exclusivamente productivista, sino que se incluye también el bienestar del trabajador. Entramos a una transición política.

Desde los años setenta, cuando Lleras fue derrotado en el partido liberal, se aceleró otra derrota: la del modelo cepalista que desde la posguerra contaba con prestigio académico y explicaciones populares convincentes. El Pacto Andino combinaba varias pretensiones: una industrialización protegida y complementaria que sustituía importaciones; control estatal sobre recursos naturales estratégicos y creación de un mercado regional protegido por un arancel externo común. Lugar destacado ocupaba la reforma agraria y el fomento a la organización campesina. En el Chile de Allende el modelo cepalista tomó un carácter democrático muy notorio; en el Perú de Velasco Alvarado se dio una inclusión de grandes sectores campesinos y en Venezuela Carlos Andrés Pérez con la nacionalización del petróleo en 1976 le dio un impulso muy fuerte a las finanzas estatales y a varios proyectos de infraestructura y de producción de acero.

Muy pronto en el área andina se darían cambios políticos hacia la derecha que significaron el desmonte o la derrota del reformismo siendo el caso más trágico el de Allende en Chile. En Brasil, Uruguay y Argentina se instalaron vía golpes militares las peores versiones del fascismo criollo.

En Colombia los momentos reformistas han sido de corta duración. Si pensamos en reforma agraria solamente, vemos como se frenó a López Pumarejo a mediados de los años treinta y a Lleras Restrepo en los setenta. Mientras que en muchos países las oligarquías del siglo 19 fueron sustituidas por otros grupos de estirpe capitalista en Colombia se impuso una desoligarquización paulatina, no por la fuerza de un movimiento popular o un cambio político sino por el surgimiento de grupos económicos nuevos que compartieron el poder con los tradicionalistas. Lleras intentó una modernización capitalista con medidas como el Pacto Andino, la incorporación a la administración de técnicos y expertos de alta formación académica y una reforma agraria que, aunque limitada, despertó la oposición de

terratenientes tradicionales y de las nuevas fuerzas políticas burguesas y de clase media que abrazaron el credo neoliberal son las consecuencias que hemos conocido.

Desindustrialización y retroceso de la agricultura marcan lo económico, paraestado y paramilitarismo marcan el régimen político real. El culto a la ganancia llevó hasta el narcotráfico y la minería ilegal.

Si el intento reformista del nuevo gobierno es otra vez frenado habrá muchos perdedores, entre ellos el campesinado.

El proyecto reformista será más fuerte si el campesinado se convierte en un factor de poder democrático. Sin embargo, hay que reconocer que hay sectores campesinos que tienen esperanzas en quienes durante más de medio siglo los han despreciado y explotado. La confrontación armada no solo produjo muertes y despojo sino también bases sociales para la confrontación, incluyendo bases sociales de la guerrilla, del paramilitarismo y de la parapolítica.

El reformismo agrario hoy no solo enfrenta retos, sino que tiene posibilidades. Gran parte del campesinado ha aprendido lo que significa organizarse. Hay una legión muy grande de liderazgos campesinos y ecológicos. En todos esos sectores hay una voluntad de cambio que ha sobrepasado los intentos de acabarlos a sangre y fuego. Esa experiencia organizativa y esa voluntad de construir otra Colombia en alianza con sectores populares y democráticos de las ciudades son el capital semilla de la transformación.

La experiencia y la voluntad que aquí se mencionan no significa que todas las organizaciones ni todos los liderazgos sean idénticos. Hay heterogeneidad y aún contradicciones en el seno del pueblo.

La política pública en materia de organización campesina y transformación agraria no se puede detener en resolver todas las contradicciones de las organizaciones.

Más allá del posicionamiento de una u otra organización lo que importa es el movimiento campesino en su conjunto. Más que aparatos que le saquen ventaja al momento lo que al fin

contará es la correlación nacional de fuerzas. En concreto: ¿puede el reformismo democrático colombiano superar la fuerza de la derecha reaccionaria? ¿Puede construirse una alianza entre el gobierno y el campesinado, los indígenas y sectores afros que ya están organizados?

Fuera del tema de la reforma agraria hay otros factores que solo se pueden enfrentar de manera unitaria. Mencionemos solo algunos.

- La actual crisis económica mundial también golpea a Colombia. Todo lo importado, incluyendo alimentos, se pone más caro y puede escasear. La producción nacional podría como en otras coyunturas sustituir al menos una parte de esas importaciones. Para ello se necesitan acuerdos sectoriales que se traduzcan en políticas públicas específicas.
 - Los acuerdos de paz en diversas regiones necesitan potenciar el papel del campesinado. Este casi siempre está fraccionado: se está en el área de uno u otro grupo armado, se es cultivador de coca o no, se está en un baldío o en una zona de reserva forestal o en un territorio de indígenas o afros.
 - Muchos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET que se acordaron entre el gobierno y las Farc no tuvieron la fuerza necesaria para cerrarle el camino a una nueva edición de conflictos armados y violencia. Es cierto que el gobierno de Duque era resistente a cumplir con el Acuerdo de Paz y que los grupos armados que no negociaron vieron la oportunidad de llenar los espacios dejados por las Farc, pero también es cierto que el campesinado, que es el que pone la mayoría de las víctimas, ni estaba unido ni podía ser una barrera de contención de la reanudación del conflicto. La objeción hecha al planteamiento del Presidente por un jefe del ELN protestando por poner en un mismo nivel delincuencia común y guerrillas de izquierda no es pertinente porque de lo que se trata es de desmontar la violencia armada en los campos. Esta violencia tiene motivaciones diferentes y sin embargo produce resultados similares en cuanto a daño material, vidas perdidas, rompimiento del tejido social y limitación a la ejecución de proyectos de desarrollo,
- De las vías a disposición del gobierno para repartir tierras entre los campesinos la que más ha llamado la atención y provocado críticas es la compra convenida con Fedegan. La objeción moral dice que no se puede comprar tierra a un gremio en el cual muchos de sus socios tienen manchadas las manos de sangre y han sido beneficiarios del despojo y

desplazamiento de campesinos. La objeción económica critica que dineros extraídos a la industria por la reforma tributaria se trasladen a los terratenientes que llevan años pagando impuestos insignificantes o evadiéndolos completamente. Aquí las organizaciones campesinas podrían jugar un papel de control trascendental apoyándose en las normas que impiden al gobierno comprar terrenos que estén bajo litigio o sospecha de que han sido mal habidos. No se debería hablar de los terratenientes vendedores de tierra como los únicos beneficiados pues el objetivo es dotar de tierra a miles de familias campesinas. Por otra parte, el acuerdo introduce una cuña en el frente terrateniente y entre los sectores que aborrecen la idea de reforma agraria. El pánico que quería crear la derecha presentando al gobierno como un implacable expropiador queda sin piso. Obvio que tendrá que explicarse a fondo entre la población y en eso las organizaciones campesinas pueden jugar un gran papel.

Aquí la objeción de Cesar Jerez (Revista Raya, 19. 10. 2022) de que el gobierno no debe hacer acuerdos con terratenientes sino con campesinos revela buenas intenciones, pero también un desatino político. Más bien podría considerarse que el gobierno, para lograr una alianza con los campesinos demandantes de tierra, hace una negociación puntual con los terratenientes para comprarles tierras que serán repartidas. Si hubiera triunfado una revolución agraria las cosas serían diferentes como también lo serían si hubiera una mayoría sólida y suficiente en el Congreso. Además de la compra, seguirán su marcha (lenta) los procesos de extinción de dominio y a mayor velocidad los de titulación de baldíos. Es de vital importancia para el proceso de transición que el gobierno muestre resultados de impacto como sería el de una entrega significativa de tierras así una parte de sea comprada (si cumple los requisitos) a los terratenientes ganaderos.

Colombia atraviesa por una situación social crítica debido a la acumulación de problemas heredados del modelo neoliberal y el conflicto armado. Hay ejemplos históricos de que las explosiones sociales también pueden afectar a un gobierno progresista y debilitar los liderazgos populares. Ante nuestros ojos se están presentando en varios países casos de recuperación de la ultraderecha que también puede jugar la carta de la inconformidad y la protesta.

En las condiciones actuales las organizaciones que quieran impulsar una nueva etapa del movimiento campesino necesitan un fuerte sentido de la unidad y mucha perspicacia política para establecerse como una fuerza social decisoria. El gobierno del Pacto Histórico ha hecho un llamamiento a fortalecer la organización del campesinado y esas son palabras que no se escuchaban desde finales de los años sesenta cuando gobernaba Lleras Restrepo. Ahora la respuesta corresponde a las organizaciones campesinas, indígenas y de afros.

José Miguel Gamboa

Foto tomada de: Pares.com